Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico conformado con motivo del Recurso de Revisión **04861/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por el Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, **Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez**, a la solicitud de acceso a la información pública 00479/NAUCALPA/IP/2024, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

**A N T E C E D E N T E S**

**I. Presentación de la solicitud de información**

Con fecha trece de junio de dos mil veinticuatro, el Particular presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), ante el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, mediante la cual requirió:

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*Del nuevo Director de Seguridad que es comoprade de Moyita la inepta se solicita su expediente labora, SU COMPROBANTE DE ESTUDIOS, SU CURRICULUM su examen de control y confianza por que cuando estuvo en otras administracones nunca lo paso solo paso el examen de la Amantes o ya olvidaron a Meryy EL PUEBLO NO OLVIDA, EL NOMBRE DE TODOS LOS CAMBIOS DE ENCARGADOS DE ZONA O COMANDATES COMO LES DICEN QUEIN SE FUE Y QUEIN LLEGO A CADA ZONA (Sic)*

***“MODALIDAD DE ENTREGA***

*A través del SAIMEX”*

**II. Prórroga para atender la solicitud**

Con fecha cuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), notificó una prórroga por siete días, para atender la solicitud de información., de conformidad con lo siguiente:

*“…*

*Derivado de la complejidad que implica la búsqueda de la información a la que desea acceder la persona solicitante, se amplía el plazo por 7 días hábiles para atender la solicitud de acceso a la información pública.*

*…”*

**III. Respuesta del Sujeto Obligado**

Con fecha quince de julio de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado notificó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, a través del oficio sin número, del quince de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos por medio del cual precisó adjuntar la Ficha Curricular del Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, así mismo precisó que la información del expediente laboral, incluyendo el comprobante de estudios, quedaron clasificados como información reservada en términos del artículo 140, fracción IV de la Ley de Transparencia Local, toda vez que contiene información sensible del funcionario en particular.

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la digitalización de los siguientes documentos:

i) Ficha curricular del Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura.

ii) Oficio número DGSCYMS/SJ/JDNPA/ETAIP/202/2024 del quince de julio de dos mil veinticuatro suscrito por el Jefe de Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos y dirigido al Particular, en los siguientes términos:

*“…*

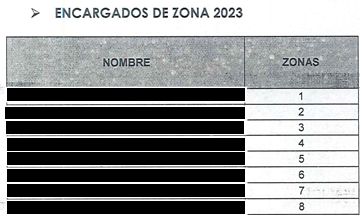
*Al respecto, me permito informar que, se solicitó información al área que se consideró competente, en cuanto a lo referente a: "****... su examen de control y confianza... "(sic)****, para lo cual la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública de este H. Ayuntamiento, para lo cual mediante oficio número STCMSP/0874/2024 signado por la Jefa de Departamento de Profesionalización y Certificación de dicha Secretaría, cuya respuesta se consideró someter al Comité de Transparencia en razón de la inminente competencia, por lo que mediante acuerdo número CT/NAU/ACTA/ORD-0014/2024/0097 de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 12 de julio de la presente anualidad, se declaró la incompetencia al respecto por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura; por lo que se le sugiere que dicha solicitud sea requerida al Centro de Control y Confianza del Estado de México dependiente de la Secretaría de Seguridad, debido a que es la autoridad competente para contestar este punto de su solicitud.*

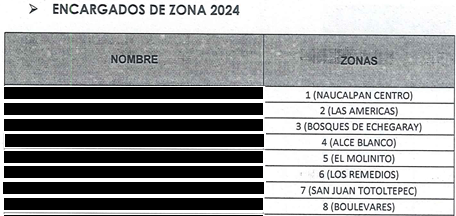
*Así mismo, en cuanto a* ***"... EL NOMBRE DE TODOS LOS CAMBIOS DE ENCARGADOS DE ZONA O COMANDATES COMO LES DICEN QUEIN SE FUE Y QUEIN LLEGO A CADA ZONA ... "*** *me permito informar que, se solicitó información al área que se consideró*

*competente, para lo cual la Subdirección de Seguridad Ciudadana mediante oficio* ***DGSCMS/SSC/4231/2024****, remitió un listado con los nombres y cambios solicitados, de lo cual, después de realizar un análisis, se consideró que dicha información debería clasificarse en su modalidad de información reservada, razón por la cual dicha información se sometió al Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez México, el cual mediante acuerdo número* ***CT/NAU/ACTA/-ORD-0014/2024/0095*** *llevado a cabo en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 12 de julio de la presente anualidad, se reservó dicha información por cuanto hace a los nombres de los elementos con fundamento en el artículo 140 fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, por un periodo de dos años.*

*…”*

iii) Oficio número DGSCMS/SSC/4231/2024 del cinco de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Seguridad Ciudadana a través del cual remitió un listado con nombres y las zonas de los cambios de los encargados de Zona y los cambios realizados para los ejercicios fiscales dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, tal como se observa en las siguientes imágenes ilustrativas:





**IV. Interposición del Recurso de Revisión**

Con fecha quince de agosto de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), Recurso de Revisión interpuesto por la parte Recurrente, en contra de la respuesta por el Sujeto Obligado, a la solicitud de información, en los siguientes términos:

***“ACTO IMPUGNADO***

*no es todo lo que se solicita falta el examen de control y confianza”*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*no entrego el examen de control y confianza y otra información (Sic.)”*

**V. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto**

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El quince de agosto de dos mil veinticuatro, el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), asignó el número de expediente **04861/INFOEM/IP/RR/2024**, al medio de impugnación que nos ocupa, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y lo turnó al Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El veinte de agosto de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificado a las partes el mismo día, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** El veintiséis de agosto y diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, se recibió, a través de Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el Informe Justificado del Sujeto Obligado, por medio del oficio número DGSCMS/SJ/JDNPA/ETAIP/0233/2024 del veintidós de junio de dos mil veinticuatro, signado por el Jefe de Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia por medio del cual ratificó su respuesta.

El Sujeto Obligado adjuntó la digitalización de los siguientes documentos:

i) Oficio número CPPPPMYMR/UTAIP/760/2024 del dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia por medio del cual remitió el Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

ii) Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez por medio del cual se declaró la incompetencia parcial de la información y la clasificación como reservada.

**d) Ampliación de plazo para resolver.** El dos de octubre de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un periodo razonable, el plazo para resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa; acto que fue notificado el quince de octubre del mismo año, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”**, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”**, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**e) Vista del Informe Justificado.** El dieciséis y veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, se dictó acuerdo mediante el cual se puso a la vista del Particular el Informe Justificado y el Alcance al Informe Justificado, entregado por el Sujeto Obligado, el cual fue notificado a las partes el mismo día, mes y año, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). **Cabe señalar que el Recurrente fue omiso en realizar alguna manifestación que a su derecho conviniera y asistiera.**

**f) Cierre de instrucción.** El treinta de octubre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes el mismo día, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO**. **Competencia**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 56 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO**. **Causales de improcedencia y sobreseimiento**

De las constancias que forma parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “IMPROCEDENCIA.” (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262), el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por la Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

Por lo cual, se actualiza la causal de procedencia del Recurso de Revisión señalada en el artículo 179, fracciones V, de la Ley en cita, pues la parte Recurrente se inconformó de la entrega de información incompleta.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

Sobre el tema, el artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que la Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

**TERCERO. Determinación de la Controversia**

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Particular requirió, lo siguiente:

1. Expediente laboral (que incluya comprobante de estudios y currículum vitae) y el examen de control y confianza, del Director de Seguridad Pública, y
2. Nombre de todos los cambios de encargados de zona o comandantes, del trece de junio de dos mil veintitrés al trece de junio de dos mil veinticuatro

En respuesta, el Sujeto proporcionó la ficha curricular del Director de Seguridad y reservó la información referente al expediente laboral, el comprobante de estudios y los nombres de los servidores públicos de todos los cambios de encarados de Zona o Comandantes, además se declaró incompetente respecto al examen de control y confianza; ante dicha respuesta por parte del Ente Recurrido, el Particular, se inconformó de la entrega de información incompleta, al señalar que no entregaban el examen de control y confianza y demás información, lo cual se actualiza supuesto previstos en el artículo 179, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Así, una vez admitido y notificado el Recurso de Revisión a las partes, el Sujeto Obligado ratificó su respuesta.

Por otra parte, cabe precisar que el Particular realizó las siguientes manifestaciones: *“que es comoprade de Moyita la inepta se solicita…” “…solo paso el examen de la Amantes o ya olvidaron a Meryy EL PUEBLO NO OLVIDA …”*; las cuales únicamente contienen afirmaciones sobre apreciaciones subjetivas carentes de sustento, al no presentar, ni aportar elementos que apoyen la localización de la información requerida, ya que refieren a pronunciamientos a la forma de actuar del Sujeto Obligado, mismas que no corresponden a una solicitud de acceso y por lo tanto, las mismas devienen de **IMPROCEDENTES**; por lo que deben desestimarse para todos los efectos a que haya lugar.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente de referencia, materia de la presente resolución, consistentes en: la solicitud de acceso a la información; la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el escrito recursal y el informe justificado; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública**

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

**QUINTO. Estudio de Fondo**

Expuestas las posturas de las partes, se procede analizar la respuesta a la solicitud, por lo que, en principio es de señalar que de las constancias que obran el expediente electrónico, se advierte que el Sujeto Obligado turno el requerimiento de información, tanto en respuesta, como Informe Justificado, a la Subdirección de Recursos Humanos, la Subdirección de Seguridad Ciudadana y el Departamento de Normatividad y Procedimientos; sobre lo anterior, resulta necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben de seguir los Sujetos Obligados para localizar la información, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

1. Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y
2. Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

Así, a efecto de determinar si el Sujeto Obligado, cumplió con el procedimiento de búsqueda antes referido, se trae al estudio el artículo 42, inciso A, fracciones VI y X, del Bando Municipal, dos mil veinticuatro, del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en relación con el Manual de Organización de la Dirección General de Administración y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, precisa que el Sujeto Obligado cuenta con diversas unidades administrativas, para el ejercicio de sus funciones, entre las cuales se encuentran las siguientes:

* **Dirección General de Administración:** Encargada de la administración de los recursos humanos y materiales, y tendrá a cargo la Subdirección de Recursos Humanos encargada de supervisar la adecuada integración y resguardo de los expedientes del personal adscrito al Ayuntamiento.
* **Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura:** Encargada de organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de seguridad pública municipal y otorgar comisiones temporales de Jefe de Región, Jefe de Zona, Jefe de Turno, Jefe de sector y Encargados de los Grupos Especiales y las demás que le sean encomendadas, y para el despacho de sus asuntos se auxiliará de la Subdirección de Seguridad Ciudadana encargada de dirigir y operar la seguridad pública por medio de Jefaturas de Región, de Zona y de Turno con base en la división territorial operativa en la que se encuentra dividido el Municipio y el Departamento de Normatividad, y Procedimientos que es la responsable de fungir como enlace con la Unidad de Transparencia.

Conforme a lo anterior, se logra colegir que el Sujeto Obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al gestionar el requerimiento de información a las áreas competente, a saber, la Subdirección de Recursos Humanos, área encargada del integración del expediente de personal y a través de su Departamento de Capital Humano del registro de asistencias y la Subdirección de Seguridad Ciudadana, encargada de dirigir y operar la seguridad pública por medio de Jefaturas de Zona, por lo que resulta procedente analizar la información proporcionada, conforme a lo siguiente:

* **Expediente laboral, currículum y comprobante de estudios**

En ese orden de ideas, el 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que las personas que quieran ingresar al servicio público deben cumplir diversos requisitos, tales como, presentar una solicitud en el formato oficial, ser de nacionalidad mexicana, estar en ejercicio de derechos civiles y políticos, no haber sido separado del servicio, tener buena salud, acreditar los exámenes de conocimientos correspondientes, entre otros.

En ese contexto, la Guía Técnica 9 “La Administración del Personal Municipal”, emitida por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, establece que el área o servidor público responsable de la administración del personal, debe llevar un control de todo el personal que ingresa al Ayuntamiento, **así como integrar sus respectivos expedientes**, de deberá contener entre otros documentos aquellos con los cuales se acredite la experiencia laboral y académica.

Además, de manera de analogía, el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo de Personal, emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, contiene el trámite denominado Expediente de Personal, que tiene como objetivo mantener actualizado la documentación de los servidores públicos, para lo cual, los trabajadores deberán entregar la información correspondiente.

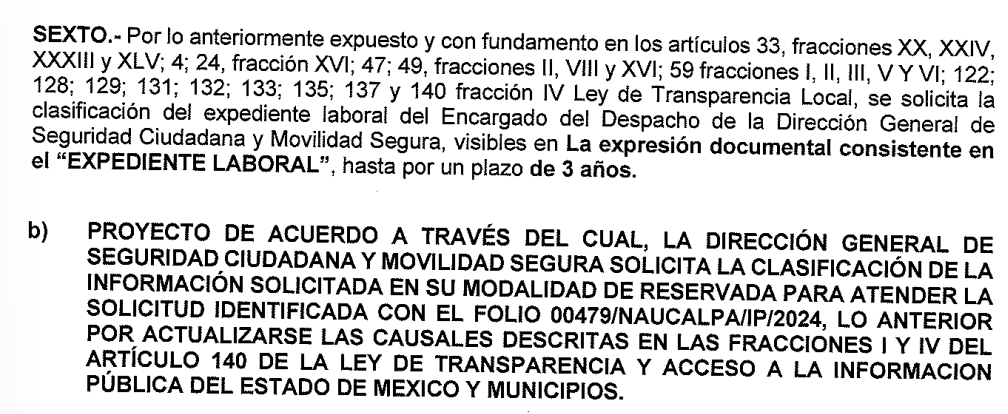
Asimismo, precisa que los expedientes se conformarán por los documentos que los servidores públicos entreguen para ingresar al cargo y se necesiten para causa alta, así como, todos aquellos que se procesen dentro de la dependencia pública, sus reconocimientos y sanciones, los movimientos que les afecten

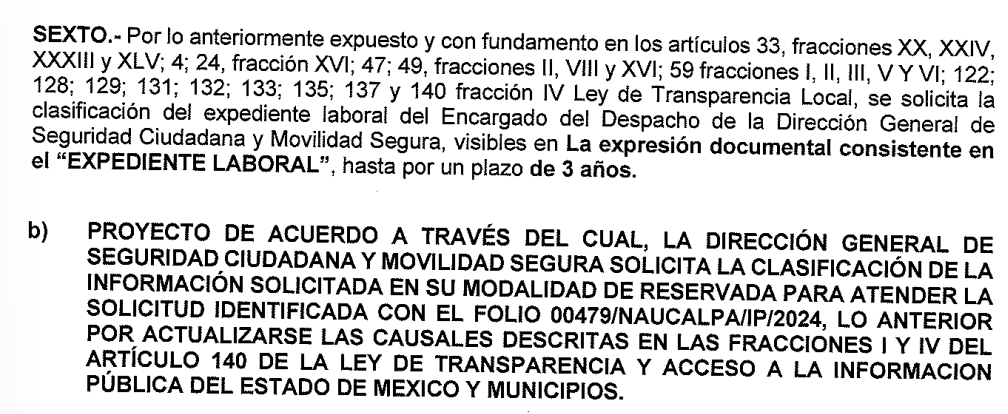
En ese contexto, el artículo 98, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que es obligación de las instituciones públicas el integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés.

En ese orden de ideas, el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, establece que la Subdirección de Recursos Humanos, es la encargada de resguardar los expedientes del personal del Ayuntamiento de Naucalpan, mismo que deberá estar integrado por:

* Nombramiento
* Formato de Movimiento
* Solicitud de empleo
* Currículum Vitae
* Acta de Nacimiento
* CURP (Clave Única de Registro de Población)
* Cartilla de Servicio Militar
* Comprobante domiciliario (recibo telefónico, de luz, de agua o de predial)
* Credencial de Elector (INE)
* Cédula de Identificación Fiscal o constancia de situación fiscal (R.F.C)
* Comprobante de grado máximo de estudios (título o certificado de estudios)
* Constancia de no Inhabilitación
* Certificado expedido por la Unidad de Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste si se encuentra inscrito o no en el mismo
* Último recibo de pago si trabajo en el Gobierno del Estado de México o alta de ISSEMYM
* Antecedentes no penales
* Certificado Médico y
* 2 cartas de recomendación

De tal suerte, se logra vislumbrar que la pretensión del Recurrente es obtener los documentos que conformaran el expediente laboral del Director de Seguridad Pública; sobre dicha información, la Subdirección de Recursos Humanos precisó que la información contenida en el expediente laboral, incluido el comprobante de estudios estaban clasificados como reservados en términos del artículo 140, fracción IV de la Ley de Transparencia Local, y por el otro lado remitió a la ficha curricular del Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Martín Manuel Antonio Riestra Rodríguez, situación que fue ratificada mediante la sustanciación del medio de impugnación a través del Acta número CT/NAU/ACTA-ORD-0014/2024 de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia , de conformidad con lo siguiente:





Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar la causal de reserva establecida por el Sujeto Obligado; para lo cual, el artículo 140, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, (homólogo del artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), prevé lo siguiente:

***“Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*…*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*…”*

Del precepto legal anteriormente citado se desprende que como información reservada **podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física**; para acreditar lo anterior, los Lineamientos Generales, establecen lo siguiente:

***“Vigésimo tercero.*** *Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión”*

Del Lineamiento referido, se desprende que para clasificar la información como reservada, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud, es decir, se deben señalar el bien jurídico específico afectado y el potencial de daño o riesgo que causaría su difusión.

Además, el artículo 81, fracción III, de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece lo siguiente:

***“Artículo 81.-*** *Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:*

*…*

*III. La relativa a los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones;*

*…”*

De lo anterior, se logra desprender que es información reservada, aquella información de los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones.

En ese contexto, cabe precisar que los datos de servidores públicos, entre los cuales se encuentran aquellos que acrediten que se cumplen con los requisitos legales para ocupar el cargo, por regla general, son de naturaleza pública, ya que su publicidad orienta a cumplir los objetivos que persigue la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

No obstante, resulta necesario traer a colación por analogía, el Criterio de interpretación, con número de registro SO/006/2009, de la Segunda Época, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada.*** *De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.”*

Además, el Criterio Reiterado 09/24, emitido por el Pleno de este Instituto, precisa que el nombre del personal operativo de seguridad pública debe clasificarse como información reservada, previa acreditación de la prueba de daño, ya que su publicidad podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud del servidor público, ya que los vuelve plenamente identificables ante grupos delictivos.

En ese orden de ideas, si bien por regla general los nombres de los trabajadores gubernamentales son información pública de oficio, existe una excepción relativa a **aquellos que realicen actividades operativas en materia de seguridad,** como es el caso de los elementos operativos y la policía municipal.

En ese orden de ideas, si bien por regla general los documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos de los servidores públicos es información pública, existe una excepción relativa a **aquellos que realicen actividades operativas en materia de seguridad.**

En ese orden de ideas, en el presente caso, se solicita la información del Director de Seguridad Pública, es decir, en el presente caso, se trata de un cargo de nivel jerárquico alto, esto es, realiza funciones de dirección y mando; lo anterior, toma relevancia con el Manual de Organización de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, que establece que el Director será el encargado de realizar lo siguiente:

* Proponer los planes y programas en materia de seguridad pública, de movilidad y seguridad vial;
* Comparecer ante el Cabildo para informar de la situación que guarda la seguridad del Municipio.
* Aplicar las directrices para la prestación del servicio de seguridad pública, coordinación, intercambio de información, funcionamiento, normatividad y disciplina;
* Organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de seguridad pública municipal;
* Mantener actualizada la base de datos del personal operativo y administrativo;
* Informar sobre movimientos de altas y bajas de los miembros del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal y movilidad vial, así como, de los vehículos, armamento, municiones y equipo.

En ese contexto, el Instructivo de llenado del Formato “Personal de Seguridad Pública”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultado el quince de junio de dos mil veintitrés, en la liga electrónica <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/328/1/images/instructivo_final_edo_fuerza(1).pdf>), establece que los elementos operativos de seguridad pública, son aquellos que desempeñan funciones de campo (policiacas, especializadas o equivalentes y que no **desempeña funciones de mando**), entre los cuales, se encuentra **la Policía Municipal**.

Además, precisa que los Directores de Seguridad Pública Municipal, son mandos superiores, ya que únicamente tienen funciones de dirección, coordinación y supervisión, por lo que, tienen el personal a su cargo, en el presente caso, a los mandos medios, personal administrativo, auxiliar y los operativos; por lo que, existe un interés público mayor de conocer de aquellas personas que tienen cargos de mando.

Además, este Instituto no advierte como proporcionar información del expediente labora del Director General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, pueden poner en riesgo su vida, seguridad o salud, pues no realiza funciones operativas y, al contrario realiza funciones de mando y dirección; además que el propio Sujeto Obligado proporcionó la información curricular de este.

Además, no se advierte de que manera proporcionar la información requerida, podría menoscabar a la seguridad municipal, dado que no se está requiriendo toda la información del personal adscrito al área, ni de su capacidad de reacción, pues solamente se solicita de aquella persona que dirige la Dirección, por lo cual, no se advierte un nexo entre o vinculo, en entregar el expediente laboral y poner en riesgo su seguridad, vida o salud; al contrario, en el presente caso, ayuda a transparentar la información de aquellos que dirigieron el área de Seguridad Pública. Además, que los documentos pueden ser entregados en versión pública, en donde se clasifiquen los datos personales.

Por tales consideraciones, no resulta procedente la reserva del expediente laboral solicitado, en términos del artículo 140, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; lo cual se robustece con el hecho de que con la prueba de daño realizada por el Comité de Transparencia, no acredita las circunstancias por las cuales resultaría procedente su clasificación, al ser genérica y no especificar, ni acreditar el vínculo que existe entre proporcionar el legajo requerido y que este por si solo ponga en riesgo la vida, seguridad y salud del Director, pues inclusive proporcionó la información curricular de este.

Ahora bien, procede analizar si procede la clasificación de la documentación que conforman los expedientes laborales, de conformidad con lo siguiente:

* **Solicitud de empleo.**

La solicitud de empleo es un documento físico o digital, que se estructura a modo de formulario y tiene como finalidad recoger información que el empleador requiere conocer del aspirante. En ese sentido, es importante mencionar que este documento se constituye por diversos datos personales como: nombre, domicilio particular, correo electrónico y número de teléfono particular e incluso, en ciertos formatos, información de estado de salud, hábitos personales o de consanguíneos, sin embargo, también da cuenta de información que en el presente caso resulta ser de interés público, como experiencia laboral y grados de estudio. Por otro lado, es necesario referir que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y el 5.4 del Código Reglamentario de Metepec, para ingresar al servicio público se requiere presentar una solicitud por escrito, es decir, la entrega de este documento resulta ser un requisito indispensable para poder prestar servicios dentro de la Administración Pública

Bajo este orden de ideas, este documento si bien, cuenta con datos personales que en nada abonan a la transparencia y rendición de cuentas, ya que atañen únicamente a la esfera privada del servidor público, también lo es que además de contener información que acredita el nivel académico o preparación de los servidores públicos, es un requisito indispensable de ingreso al servicio público, por lo que, su acceso toma relevancia al guardar relación directa con la contratación del servidor público y con el ejercicio de sus atribuciones.

De esta manera, se trata de un documento de interés público, que contiene datos que actualizan la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo tanto, deben proporcionarse en versión pública.

* **Acta de nacimiento**

Las actas emitidas por el Registro Civil dan cuenta de un atributo de la personalidad, tal como lo establece el artículo 2.3 del Código Civil del Estado México. En ese orden de ideas, el artículo 3.5 del citado Código Civil establece que el estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil, tal como lo es el Acta de Nacimiento.

Ahora bien, de acuerdo con el Formato Único del Acta de Nacimiento publicado por la Secretaría de Gobernación en el enlace http://www.diputados.gob.mx/documentos/N\_Acta\_Nacimiento.pdf, se advierte que el Acta de Nacimiento se componte de quince elementos siendo los siguientes:

a) Folio de Impresión.

b) Denominación del Documento.

c) Identificador Electrónico.

d) Elementos del Registro.

e) Datos de la Persona Registrada.

f) Datos de Filiación de la Persona Registrada.

g) Anotaciones Marginales.

h) Certificación.

i) Código Bidimensional QR que contiene información encriptada del acta.

j) Leyenda “Soy México”

k) Firma Electrónica Avanzada.

l) Firma y datos de la autoridad emisora.

m) Código QR.

n) Código de Verificación.

o) Leyenda de instrucciones para la verificación del documento.

Como se advierte del análisis de los apartados d) elementos de registro, e) datos de la persona registrada y f) datos de filiación de la persona registrada, el Acta de Nacimiento, contiene la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona registrada y de las personas que detenten la filiación, número de certificado que expide la Secretaría de Salud para acreditar el nacimiento de una persona, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, entre otros.

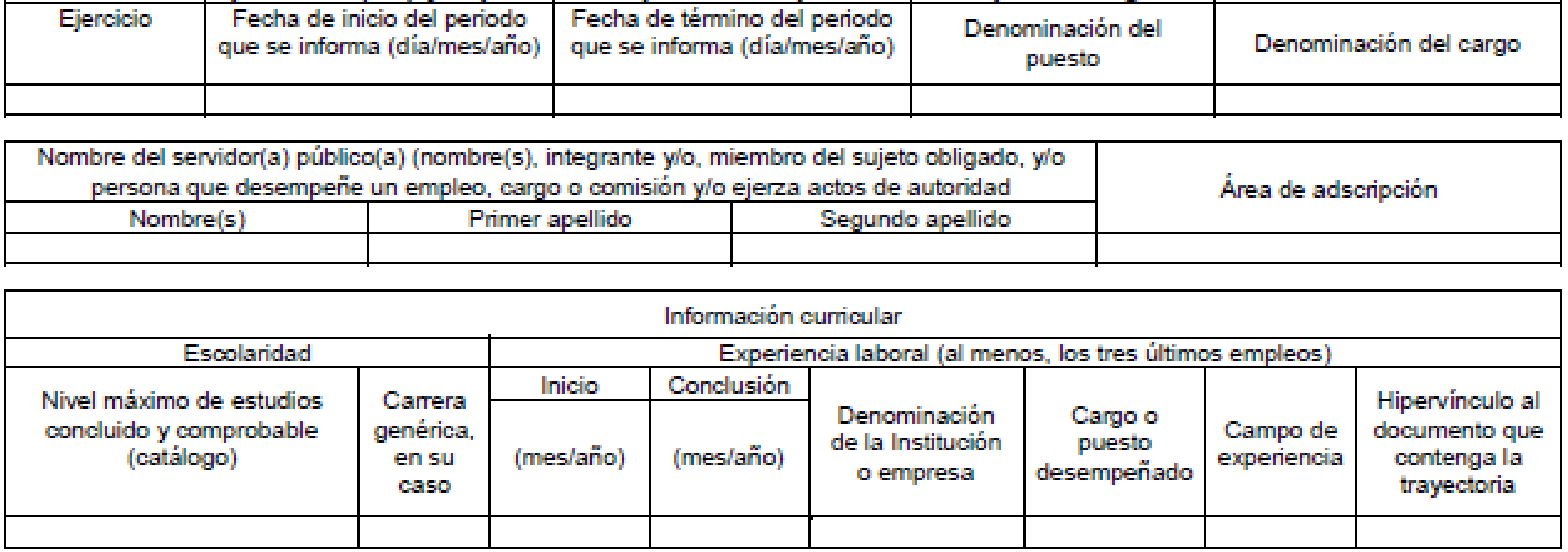
Dada esta relevancia y que no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones de servidores públicos es que su contenido del Acta de Nacimiento debe ser analizado en su totalidad, además que parte los dato que integran hacen identificable a la persona sin tener que ver con el ejercicio de un cargo público. Pues como se señalado, el Acta de Nacimiento comprueba el estado civil de una persona por lo que es un tema que tiene que ver con la vida privada, ya que, para acceder a un cargo público, el estado civil de las personas es irrelevante, ya que tener uno u otro no influye en el mejor o menor desempeño de un cargo público.

De esta manera, se trata de un **documento de naturaleza confidencial** que tiene que ver únicamente con la vida privada de las personas, motivo por el cual se considera que actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

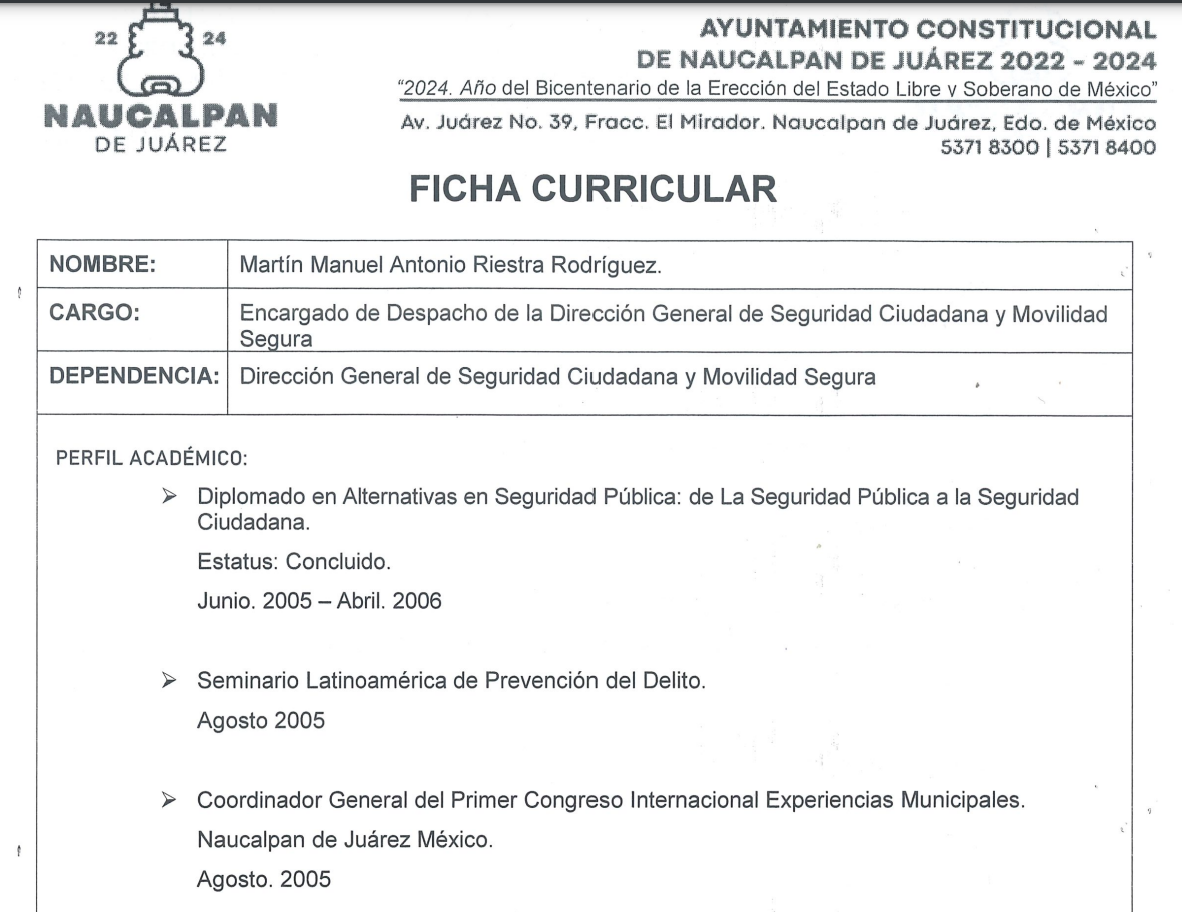
* **Currículum Vitae**

Al respecto, la fracción **XXI**, del **artículo 92** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** que establece que la **información curricular** es información que deben de poner a disposición del público los sujetos obligados, en el presente caso, la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, toma relevancia, pues conforme al formato 17 LGT\_Art\_70\_Fr\_XVII (Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión) de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –Lineamientos Generales-, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establece como datos a publicar, de los servidores públicos, el nivel máximo de estudios concluido y comprobable, así como la experiencia laboral, concerniente a los tres últimos empleos, tal como se muestra continuación:



Ahora bien, mediante respuesta el Sujeto Obligado proporcionó la Ficha curricular del Servidor Público referido en la solicitud de información, tal como se logra vislumbrar en el siguiente extracto:



Conforme a lo anterior, se puede observar que el Sujeto Obligado, desde respuesta, proporcionó la información que obraba en sus archivos y da cuenta de la información peticionada, a saber, el Currículum Vitae del Servidor Público referido en la solicitud ; sobre el tema, el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que los sujetos obligados sólo están constreñidos a proporcionar la información pública que obre en sus archivos, en el estado en que esta se encuentre.

* **Fotografías de los servidores públicos.**

Por lo que hace a las fotografías, es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.

Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.

Además, existen documentos que contienen la fotografía con los cuales se permite identificar que una persona que se acredita como trabajador gubernamental, realmente tiene el cargo con el que se ostenta, otros documentos con los cuales se rinde cuentas a la ciudadanía, por ejemplo cuando se cubre el perfil de puesto; además cuando se brinda servicios a la ciudadanía, es de relevancia conocer e identificar a todos sus trabajadores, no importa el nivel o rango (con excepción del personal operativo en materia de seguridad, respecto del cual el Pleno de este Instituto ya se ha pronunciado en el sentido de que la información que los haga identificados o identificables debe clasificarse como reservada).

En este sentido, resultan aplicables por analogía, los Criterios 15/17 y 1/13 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los cuales se esgrimen argumentos, que, si bien no refieren de manera específica a fotografías de servidores públicos, sí establecen un criterio para que este dato personal pueda ser considerado como público, cuando se pretende acreditar que una persona es servidor público.

Debe tenerse presente que el actuar de los servidores públicos incide de manera específica en los derechos de los particulares, pues el acto de un servidor público en ejercicio de sus funciones, de manera directa genera derechos y obligaciones pues se considera un acto administrativo o acto de autoridad, por lo que es primordial, que estos trabajadores se identifiquen ante la ciudadanía, por lo que otorgar acceso a los documentos que obran en los archivos de los sujetos obligados y que además están directamente relacionados con el cumplimiento de disposiciones normativas o el ejercicio de funciones revisten un interés público.

Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, deben ser consideradas un dato personal, que no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.

De acuerdo con el argumento planteado, la determinación de esta resolución deja sin efectos el criterio adoptado anteriormente por el Pleno de este Instituto, con número 03/2019, en el que solo se consideraban como públicas las fotografías de mandos medios y/o superiores.

Conforme a lo anterior, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas **(con excepción del personal operativo en materia de seguridad)** y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información. **Cabe hacer la aclaración que aquellos documentos que sean clasificados en su totalidad por no revestir de interés público, como lo es la credencial de elector, la fotografía correrá la misma suerte que el documento en cuestión, únicamente para dicha expresión documental.**

* **Clave Única de Registro de Población**

El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos; además, el diverso 85 de la Ley General de Población, prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Acorde con lo anterior, el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establece en su fracción III, que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal tiene la atribución de asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Gobernación en las direcciones <https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html> y <https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp-142226> (consultadas el tres de noviembre de dos mil veintidós), estableció que la Clave Única del Registro de Población, es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero y se compone de dieciocho elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad del interesado (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) de la siguiente forma:

* El primero y segundo apellidos, así como al nombre de pila;
* La fecha de nacimiento;
* El sexo, y
* La entidad federativa de nacimiento.

Los dos últimos elementos de la Clave Única de Registro de Población evitan la duplicidad de la Clave y garantizan su correcta integración.

Como se desprende de lo anterior, la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, ya que además no guarda relación con el desempeño laboral de un individuo, simplemente se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.

Situación que se robustece, con el Criterio de interpretación, con clave de control SO/018/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

De acuerdo con lo anterior, **resulta procedente la clasificación** de la Clave Única de Registro de Población; por lo que, la constancia de dicho dato corre al misma suerte, pues únicamente contiene datos que hacen identificables de los servidores públicos, que en nada abonan a la transparencia y no rinden cuantas de la forma de actuar, por lo que, es un documento privado, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Cartilla del Servicio Militar Nacional**

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento cuya existencia está prescrita por la ley y sirve para identificar a los ciudadanos mexicanos varones que han cumplido con esta obligación legal.

La expedición de la Cartilla del Servicio Militar Nacional es el origen del procedimiento administrativo y legal por medio del cual la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina integran los listados o bases de datos de la población que integra las reservas de las Fuerzas Armadas Nacionales, susceptible de ser convocada o movilizada en caso de necesidad o emergencia.

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento que además de servir como identificación oficial se requiere para la realización de diversos trámites oficiales.

La prestación del Servicio Militar Nacional es un derecho y una obligación de todos los mexicanos por nacimiento o por naturalización.

Su cumplimiento legal se demuestra mediante la expedición de un documento específico, una tarjeta de identidad que es conocida como Cartilla del Servicio Militar Nacional y la cual se expide con fundamento en el artículo 49 de la Ley del Servicio Militar Nacional y cuya redacción actual es la siguiente:

***“ARTICULO 49.-****Todos los mexicanos de edad militar recibirán una tarjeta de identificación en la que consten sus generales, huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá gratuitamente y deberá ser visada cada año por la Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de la Defensa Nacional fijará oportunamente la fecha desde la cual dicha tarjeta es exigible.”*

El formato de esta cartilla se establece en al artículo 17 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional, el cual señala que "*La inscripción de cada mexicano se hará una sola vez, entregándole gratuitamente una cartilla de identificación según modelo número uno*".

Posteriormente, en el artículo 151 de dicho Reglamento se señala que los datos que deberá tener este documento de identidad serán:

* Un retrato de frente;
* Sus generales (nombre y apellidos paterno y materno, edad, ocupación, estado civil y domicilio);
* Matrícula;
* Clase a que pertenece;
* Corporación a que se le destine;
* Unidad a la que deba incorporarse en caso de movilización;
* Firma de la autoridad que la expida;
* Firma del interesado, si sabe hacerlo;
* Sello de la Junta Municipal de Reclutamiento o Consulado;
* Huella digital.

Del listado de la información que integra la cartilla de identificación o llamada cartilla de servicio militar, se advierte que son netamente datos personales que se alejan de la transparencia y rendición de cuentas, los cuales su divulgación infiere en la esfera íntima del titular, por lo que **resulta idónea su clasificación en su totalidad como información confidencial.**

* **Domicilio particular y comprobante de domicilio.**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas**, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.**

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

La misma suerte corre el comprobante de domicilio, pues mediante este se acredita que la servidora pública vive donde señala en los documentos que entrega; sin embargo, es de señalar que este documento guarda la naturaleza de privado, pues no abona en nada a la transparencia, ni rinde cuentas de la forma de actuar de la trabajadora, al contrario la hace ubicable en su carácter de particular, por lo que, se concluye que el comprobante guarda la naturaleza de privado.

Por lo tanto, **se actualiza la clasificación del domicilio y su comprobante**, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Constancia o certificado médico**

En principio, es de señalar que cualquier información que dé cuenta del **estado de salud de una persona**, concierne a su vida íntima y privada; lo anterior, pues el artículo 4°, fracción XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, establece que los datos personales sensibles, son aquellos cuya utilización indebida, puedan dar origen a discriminación o conlleven a un riesgo grave para éste, entre los cuales se encuentran los que **den cuenta del estado de salud, ya sea físico o mental.**

De tales circunstancias, se considera que la información contenida en el certificado médico únicamente identifica el estado de salud físico y mental de los servidores públicos, lo cual **guarda el carácter confidencial**, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

* **Credencial para Votar.**

Sobre este documento, se debe señalar que la responsabilidad de formar el Padrón Electoral y expedir la credencial de elector, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, apartado 1, incisos b) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De manera particular el artículo 156, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos:

*“…*

***a)*** *Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;*

***b)*** *Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;*

***c)*** *Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;*

***d)*** *Domicilio;*

***e)*** *Sexo;*

***f)*** *Edad y año de registro;*

***g)*** *Firma, huella digital y fotografía del elector;*

***h)*** *Clave de registro, y*

***i)*** *Clave Única del Registro de Población.*

***2.*** *Además tendrá:*

***a)*** *Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;*

***b)*** *Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;*

***c)*** *Año de emisión;*

***d)*** *Año en el que expira su vigencia, y*

***e)*** *En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”.*

Como se advierte, todos los elementos contenidos en la credencial hacen a su titular, identificado, identificable e incluso ubicable en su domicilio. El número o la clave de la credencial de elector, son únicos e irrepetibles y; de manera general este documento es utilizado para identificarse al momento de realizar trámites oficiales y de tipo privado, incluso en algunos lugares se tiene por costumbre tomar datos de la credencia para asentar en un documento como manera de acreditar la presentación de su titular y comprobar que la credencial se tuvo a la vista, por ello su relevancia y lo delicado de su uso.

Es de tener presente que la finalidad esencial de la credencial para votar con fotografía es la de ejercer el derecho humano de votar y ser votado; sin embargo, en el país, este documento es el reconocido a nivel general como medio idóneo para identificarse incluso de manera oficial; en el Estado de México está reconocida como identificación oficial en el artículo 2.5 Bis, fracción II del Código Civil del Estado de México.

Dada esta relevancia y que no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones de servidores públicos es que su contenido debe ser analizado en función del documento total, ya que esta obra por ser el medio preferible de identificación como ciudadano y no en función del cargo público, por lo que se entiende que se analizan en su conjunto los datos personales contenidos en la misma, con excepción del nombre; por lo que, en el presente caso, se considera que la credencial de elector, **es confidencial y actualiza la causal de clasificación**, establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Cédula de Identificación Fiscal.**

Al respecto, cabe precisar que las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que están obligadas a expedir comprobantes fiscales, tienen que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, esta inscripción es realizada por el Servicio de Administración Tributaria, quien entrega una cédula de identificación fiscal en donde consta la clave que asigna este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo en comento, esta clave se compone de trece caracteres alfanuméricos, con datos obtenidos de los apellidos, nombre(s), fecha de nacimiento del titular, más una homoclave que establece el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria.

En ese contexto, conforme a la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, en el apartado Obtén tu cédula de identificación fiscal (consultado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés a las catorce horas en la liga <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal>), establece que dicho documento se acredita tu Registro Federal de Contribuyentes, el cual contiene un código QR, que muestra la información del propietario de la clave; es decir mediante la obtención de la Cédula, se inscribe y obtiene el Registro Federal de Contribuyentes.

En ese orden de ideas, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, es el medio de control que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; mientras que los particulares tramitan dicho dato, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.

Así, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, ya que hace a las personas físicas identificas e identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales. Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucrada, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Lo anterior, resulta congruente con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con número de registro SO/019/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

De tal suerte, el Registro Federal de Contribuyentes de los servidores públicos no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, así como tampoco con el desempeño laboral que pueda tener una persona, por lo que constituye un dato personal confidencial al actualizar el supuesto normativo del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; por lo que, la Cédula de Identificación Fiscal corre la misma suerte que el RFC, pues mediante dicho documento se obtuvo dicho dato, el cual es meramente privado y no abona en nada a la Transparencia.

* **Comprobante de estudios y firma en dichos documentos.**

Como se logró advertir, los documentos contenidos en los expedientes laborales por su propia naturaleza pueden contener documentos que atañen a la esfera privada de los servidores públicos, que en nada abonan a la transparencia y rendición de cuentas, no obstante, **no debe dejarse de lado que el permitir el acceso a la información que da cuenta de la preparación académica o experiencia necesaria para ocupar un cargo, abona a que la ciudadanía conozca el perfil de aquellas personas que laboran dentro de la Administración Pública, asimismo, aquellos documentos que son generados por el ingreso o desempeño de la función del servidor público y que forman de los requisitos de acceso al cargo, deben ser entregados en su versión pública**.

Al respecto, resulta conveniente señalar lo establecido por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que para ingresar al servicio público se requieren cumplir diversos requisitos, tanto académicos, como profesionales y personales establece que las personas que quieran ingresar al servicio público deben cumplir diversos requisitos, tales como, presentar una solicitud en el formato oficial, ser de nacionalidad mexicana, estar en ejercicio de derechos civiles y políticos, no haber sido separado del servicio, tener buena salud, acreditar los exámenes de conocimientos correspondientes, entre otros.

Asimismo, el artículo 22 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de México precisa que para ocupar el cargo de Director de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, deberá tener licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia.

Además, es de referir que es de interés público de la ciudadanía, conocer que los trabajadores gubernamentales cumplen con todos los requisitos establecidos en la normatividad respectiva, pues solo así, se puede saber, si los empleados, **son aptos para ocupar determinados puestos;** por otra parte, la publicidad de la información ayuda a rendir cuentas a la población, respecto a que las dependencias gubernamentales cumplen con lo establecido en los ordenamientos jurídicos, ya que permite a las personas verificar que una Dependencia o Ayuntamiento, contrata a servidores públicos capaces e idóneos para cumplir con sus funciones y cumplen con los requisitos respectivos.

Así, los expedientes laborales sirven como medio para acreditar que los servidores públicos cumplieron con todos los requisitos establecidos para ser contratados, como experiencia académica y laboral, por lo que, **abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues sirven a la ciudadanía para comprobar que las personas que se desempeñan como servidores públicos tienen el perfil idóneo, la capacidad, las habilidades y la pericia para desarrollar las actividades y atribuciones que se deriven de su encargo.** Por lo cual, se considera que no procede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de la materia.

Ahora bien, respecto a las firmas contenidas en los comprobantes de estudios (títulos profesionales, cédulas profesional, etc), cabe precisar que, en el presente caso, se trata de los servidores públicos en su calidad de particular, por lo que, es de señalar que la firma es un dato personal confidencial y únicamente será público dicho dato cuando sirva para la emisión de un acto de autoridad, en ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, es así, toda vez que la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues garantiza que los trabajadores recibieron sus remuneraciones quincenales.

La publicidad de dichos datos, se robustece, con el criterio de interpretación, con clave de control SO/002/2019, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Firma y rúbrica de servidores públicos.*** *Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, procede la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la firma localizada en el Título profesional y/o cédula profesional, pues da cuenta de la aceptación de un grado ante la Secretaría de Educación Pública.

* **Constancia de No Inhabilitación**

Al respecto, se logra vislumbrar que contiene el Registro Federal de Contribuyentes, sobre dicha circunstancia, cabe precisar que el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, que hace a las personas físicas identificas e identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales.

Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucrada, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo y no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, así como tampoco con el desempeño laboral que pueda tener una persona, por lo que constituye un dato personal confidencial.

No obstante este Instituto considera que la fecha de elaboración y el código de barras de autenticación, pues corresponde al identificador electrónico de verificación de la constancia, que de su acceso, no arroja algún tipo de dato personal, por lo que, al no desprenderse información de la vida privada del servidor público, mismas que no actualiza algún supuesto de clasificación, no bastante toda vez que contiene datos personales como el RFC , actualiza lo previsto en el artículo 143, fracción I de la Ley en la materia, por lo que, resulta procedente su entrega en versión pública.

* **Certificado de no deudor alimentario moroso**

Respecto a este punto, es de indicar que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf>, en sus artículos 1, 13, 18 y 46, regula de manera enunciativa y no limitativa, entre otros derechos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, el recibir alimentos para lograr el sano desarrollo del menor en su ámbito, bio-psico-social, y establece como obligación de los progenitores para con sus hijos, el proporcionarles, apoyo, cuidados, educación y protección a su salud.

De ahí que, se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.

**La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.** Es de recalcar que las Autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; es decir, la denominación que se le dio fue el de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ya que, la palabra moroso deriva de mora; la mora es el retraso en el cumplimiento de las obligaciones y se incurre en ella desde el momento en que feneció el plazo que se señaló para el cumplimiento de una obligación.

Al respecto, en el Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones para crear el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de México, disponible en la dirección electrónica <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/nov144.PDF>, advierte lo siguiente:

***“****4.146 Bis.- El área del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es una unidad administrativa del Registro Civil. Actos inscribibles en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos*

*4.146 Ter.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se inscriben a las personas que el Juez de lo Familiar determina en términos del artículo 4.136 del presente Código.*

*Serán objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional.*

*De los datos que contendrá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos*

*Artículo. 4.146 Quáter.- El Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá:*

*I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario;*

*II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;*

*III. Datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso;*

*IV. Monto de la pensión decretada o convenida, en su caso, número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;*

*V. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro;*

*VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción.*

*Una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior se girará oficio al Instituto de la Función Registral del Estado de México, a efecto de que se anote el certificado de deudor alimentario en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario. El Instituto de la Función Registral informará al Registro Civil si fue procedente la anotación, en cuyo caso dará aviso al Juez del conocimiento para que el acreedor alimentario haga cobrable las cantidades adeudadas en la vía judicial respectiva.*

***Datos del Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos***

*Artículo 4.146 Quinquies.-* ***El Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá lo siguiente:***

*I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del solicitante;*

*II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos.*

*De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo siguiente:*

*I. Número de acreedores alimentarios;*

*II. Monto de la pensión alimenticia decretada o convenida;*

*III. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro;*

*IV. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción.*

*El Certificado a que se refiere el presente artículo será expedido el mismo día hábil de su solicitud.*

*…”*

Ahora bien, respecto a aquellos servidores públicos que se encuentren o no inscritos en dicho registro, procede su entrega en versión pública, ya que al ser un requisito ***sine qua non*** para ingresar al servicio público, específicamente como Titular de alguna Unidad Administrativa Municipal, se convierte en información que da certeza a la ciudadanía de que el Servidor Público que ostenta un cargo de Titular cumplió con los requisitos señalados por el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, tan es así, que se trae a colación lo señalado en la nota periodística <https://www.unionedomex.mx/2023/03/24/busqueda-de-deudores-alimentarios-morosos-estado-de-mexico-2023/>, que a manera de referencia, se inserta:



Derivado de lo anterior, cualquier ciudadano que desee obtener dicha información, podrá ingresar a la Ventanilla Electrónica Única, en la que accederá con su CUTS y contraseña, capturando los datos como son CURP, nombre, primer y segundo apellido, y se comenzará la búsqueda de lo solicitado, en el que arrojará si se encuentra en calidad de deudor o no. En este sentido, se advierte que al ser un requisito indispensable y preponderante para ser Titular de Unidad Administrativa dentro del Ámbito Municipal, el Sujeto Obligado deberá hacer entrega de dicho documento que dé cuenta de que no es una persona que ha incumplido con las obligaciones alimentarias, en caso de que estas existan, toda vez que si bien, debe considerarse que se trata del ámbito privado, esta determinación se toma en función de la preponderancia del interés superior del menor, por tal motivo, un requisito para que las personas puedan laborar en el servicio público es justamente, cumplir con las obligaciones que adquieran con sus menores hijos, porque al haberlas cubierto, no formarán parte de ese registro, **por lo que no procede su clasificación total,** no pasa desapercibido, que el Certificado de No Deudor Alimentario, pudiere contener información confidencial, como lo es el CURP y R.F.C.

* **Certificado de No Antecedentes Penales**

El Certificado de No Antecedentes Penales, es un documento que emite el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en los casos en que las leyes lo exijan como forma para acreditar requisitos para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, en instituciones de seguridad u otros que las propias leyes establezcan o bien, cuando sea requerido de manera fundada y motivada por autoridades competentes.

La expedición del Certificado o informe permite acreditar si una persona ha sido o no condenada por sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes, es decir, certifica que una persona no cuenta con antecedentes o procesos penales pendientes.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, **fracciones III y X**, para ingresar al servicio público se requiere estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos y no encontrarse inhabilitado para el desempeño de servicio público, asimismo, el artículo 5.4, fracciones IV y V, establecen que es requisito indispensable para ingresar al servicio público, gozar plenamente de los derechos civiles y políticos y presentar Certificado de No Antecedentes Penales.

En ese sentido, este documento se constituye de diversos datos personales como: nombre, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, domicilio particular, entre otros, que atañen únicamente a la esfera privada del servidor público, sin embargo, también constituye un requisito indispensable de ingreso al servicio público municipal, por lo que, guarda relación directa con la contratación del servidor público y con el ejercicio de sus atribuciones. De esta manera, se trata de un documento de interés público, que contiene datos que actualizan la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo tanto, debe proporcionarse en versión pública.

* **Cartas de Recomendación.**

Sobre dichos documentos, es de señalar que corresponden aquellos documentos en donde personas particulares dan referencias o una valoración de la persona que recomiendan, las cuales pueden contener información de su forma de actuar, comportarse, valores, entre otras cuestiones, por lo que, se considera que son documentos de naturaleza privada, pues no abonan en nada a la transparencia, ni rinden cuentas del actuar de una trabajadora gubernamental, sino corresponde una apreciación subjetiva de una persona para recomendar a otra, las cuales son ocupadas comúnmente al solicitar un empleo.

Por lo que, se considera que dichos documentos actualizan la clasificación, de la causal establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Conforme a lo anterior, deberá clasificar en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Acta de Nacimiento, Cartilla Militar, comprobante de domicilio, credencial de elector, cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, certificado médico y cartas de recomendación. El resto de los documentos, deberá proporcionarlos en versión pública, en donde clasifique los datos personales.

* **Examen de Control y Confianza**

Al respecto, el Sujeto Obligado precisó que mediante Acuerdo número CT/NAU/ACTA/ORD-0014/2024/0097 de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, se declaró la incompetencia respecto al examen de control y confianza del

Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad, por lo que orientó al Particular a dirigir su solicitud al Centro de Control y Confianza del Estado de México, dependiente de la Secretaría de Seguridad, situación que fue ratificada mediante informe justificado tal como se muestra a continuación:



En ese orden de ideas, artículo 66 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el diverso 109 de la Ley de Seguridad del Estado de México, establecen que la certificación es el proceso por el cual **los integrantes de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia se someten a las evaluaciones establecidas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.**

En ese contexto, el Centro de Control de Confianza del Estado de México, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado de la Secretaría de Seguridad, cuyo objeto es realizar las evaluaciones permanentes de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirante e integrantes de las instituciones de seguridad pública y privada, estatal y municipal, **a fin de emitir la certificación correspondiente.** Además, que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública sin contar con el Certificado y registro vigentes.

En ese sentido, el artículo 5°, fracciones VIII, IX y X, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el diverso 6°, fracciones XI y XII, de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece lo siguiente:

* **Instituciones Policiales:** Son los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, detención preventiva, centros de arraigo y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
* **Instituciones de Procuración de Justicia:** Son aquellas de la Federación y Entidades Federativas que integran el Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y auxiliares.
* **Instituciones de Seguridad Pública:** Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

Sobre lo anterior, el Instructivo de llenado del Formato “Personal de Seguridad Pública”, del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultado, en la liga <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/328/1/images/instructivo_final_edo_fuerza(1).pdf>, el primero de octubre de dos mil veinticuatro, a las diez horas), establece que las instituciones de seguridad pública, se integran por los siguientes categorizaciones de puestos:

Sobre lo anterior, el Instructivo de llenado del Formato “Personal de Seguridad Pública”, del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultado, en la liga <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/328/1/images/instructivo_final_edo_fuerza(1).pdf>, el primero de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas), establece que las instituciones de seguridad pública, se integran por los siguientes categorizaciones de puestos:

* **Mando:** Se conforma por el personal con funciones de dirección, coordinación y supervisión, es decir, los altos mandos y mandos medios y superiores.
* **Operativos:** Integrado por el personal que desempeña funciones de campo (policiacas, especializadas y no tienen funciones de mando), tales como la Policía Ministerial, Judicial, Estatal Preventiva, Municipal, escoltas, grupos antisecuestro, terrorismo, inteligencia, grupos de reacción o equivalentes.
* **Administrativos:** Conformado por el personal de apoyo.

Conforme a lo anterior, se advierte que la información solicitada corresponde a un servidor público de mando, pues corresponde al Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad; además que para ingresar o permanecer en el puesto, debe de contar con la certificación de control de confianza.

Así, se colige que la pretensión del ahora Recurrente, es obtener el documento donde conste el resultado global de la evaluación de confianza vigente a la fecha de la solicitud, es decir, aquel que señale que el servidor público, aprobó o no la evaluación de confianza, por lo que, no requiere tener acceso a las evaluaciones individuales realizadas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México y Municipios.

Al respecto, los Lineamientos de Operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal, traídos de manera de analogía, precisan lo siguiente:

* **(Artículo 27):** El resultado único del proceso de evaluación, es la consecuencia del análisis objetivo y metodológico de la información recolectada durante la aplicación del Proceso de Evaluación, el cual se emitirá en los siguientes términos:
* Aprobado;
* No aprobado, y
* No cubre con el perfil de puesto.
* **(Artículo 30):** El resultado único del proceso de evaluación, debe emitirse valorándose y ponderándose de forma conjunta e integral los exámenes que conforman el Proceso de Evaluación aplicado a cada Evaluado.

En ese orden de ideas, el artículo 21 de la Ley de Seguridad del Estado de México, precisa que es atribución de los Presidentes Municipales verificar que los integrantes de las instituciones policiales a su cargo, se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial.

Conforme a lo anterior, se logra observar que el Sujeto Obligado es competente para conocer de la información peticionada y que la pretensión del ahora Recurrente, es obtener, el documento donde conste el resultado global (aprobado, no aprobado, entre otros) de la evaluación de confianza vigente al trece de junio de dos mil veinticuatro.

Conforme a lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable, en todos los archivos de las unidades administrativas competentes previamente referidas, a efecto de que proporcionen el documento donde conste el resultado global de la evaluación de control y confianza del Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad, al trece de junio de dos mil veinticuatro.

Dicha situación toma sustento en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que los sujetos obligados sólo están constreñidos a proporcionar la información pública que obre en sus archivos, en el estado en que esta se encuentre; por lo que, la entrega no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del Solicitante.

De esta manera, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en el que conste la información solicitada, sin necesidad de elaborar documentos *“ad hoc”;* lo cual, toma sustento en el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De tales circunstancias, se concluye que los sujetos obligados únicamente se encuentran constreñidos a proporcionar los documentos que den cuenta de la información solicitada, como obren en sus archivos, sin tener que elaborarlos a las necesidades del Recurrente; por lo que, en el presente caso, deberá entregar el resultado global de avaluación de control de confianza.

Al respecto, es dable mencionar que los artículos 39, aparatado B, fracción VIII, 40, fracción XV, 56, segundo párrafo, 73, segundo párrafo, 74, 85, fracciones II y III, 88, apartado A, fracción VI, apartado B, fracción VI, 96 y 97, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen lo siguiente:

* Que corresponde a los municipios abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
* Que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deben someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
* Que los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables;
* Que tanto los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno, pertenecientes a la Carrera Policial, como aquellos considerados de Confianza, en caso de **no** acreditar las evaluaciones de control de confianza, podrán darse por terminados los efectos de su nombramiento;
* Que todo aspirante a ingresar a la Carrera Policial deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; por lo que ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
* Que tanto para el ingreso como para la permanencia en la Carrera Policial es requisito aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
* Que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia;
* Que las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo, y
* Que el objeto de la certificación es identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios.

Por su parte, los artículos 19, 21, fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, 58 Quinqués, fracción VI y 109, cuarto párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, determinan lo siguiente:

* Que son autoridades municipales en materia de Seguridad Pública, los ayuntamientos, los presidentes municipales, los directores de seguridad pública municipal y los integrantes de las instituciones policiales en ejercicio de su función;
* Que son atribuciones del **Presidente Municipal**, verificar que los integrantes de las instituciones policiales a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; solicitar al Centro las evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los integrantes de las instituciones policiales a su cargo; solicitar a la Comisión de Honor y Justicia, la instauración del procedimiento en contra de los integrantes de las instituciones policiales a su cargo que no haya presentado o aprobado las evaluaciones de control de confianza; vigilar la separación impuesta con motivo de la resolución correspondiente emitida por la Comisión de Honor y Justicia, a los integrantes de las instituciones policiales a su cargo que no hayan aprobado las evaluaciones de control de confianza;
* Que son atribuciones del **Secretario o Secretaria Técnica del Ayuntamiento**, fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el estado de fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de control de confianza, y
* Que los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Además, el artículo 22 Bis, de la Ley de Seguridad del Estado de México, precisa que para ocupar el cargo de Director de Seguridad Pública Municipal o equivalente, se deberán cumplir diversos requisitos, entre los cuales se encuentra **someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.**

Conforme a la normatividad citada, **se advierte que la evaluación de control de confianza es un requisito indispensable para ingresar y permanecer en el cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad,** y que el resultado de los procesos y los expedientes que se formen con los mismos, son confidenciales, es decir, que el resultado aislado de cada etapa de examen es confidencial; **sin embargo, el resultado global, correspondiente a que el servidor público aprobó la evaluación, en el presente caso, “Aprobado” o “No Aprobado”, guarda la naturaleza pública.**

Situación que guarda relevancia, pues en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 88/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que los resultados de las evaluaciones de control de confianza, es decir, los resultados de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y estudios socioeconómicos, guardan la naturaleza de confidencial.

Además, es de referir que es de interés público de la ciudadanía, conocer que los trabajadores gubernamentales cumplen con todos los requisitos establecidos en la normatividad respectiva, sobre todo, en materia de seguridad pública, pues solo así, se puede saber, si los empleados señalados, **son aptos para ocupar determinados puestos;** toma relevancia dicha situación, al tratarse, en el presente caso de un cargo de mando.

Situación que toma sustento en el artículo 21, décimo párrafo inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alude a que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, deben de estar certificados; además, que el 22 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de México, de manera específica que el Encargado de Despacho referido en la solicitud, debe aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Asimismo, la publicidad de la información ayuda a rendir cuentas a la población, respecto a que las instituciones de seguridad cumplen con lo establecido en los ordenamientos jurídicos, ya que permite a las personas verificar que una Dependencia o Ayuntamiento, contrata a servidores públicos capaces e idóneos para cumplir con sus funciones y cumplen con los requisitos respectivos, sobre todo, si se trata de una trabajadora en materia de seguridad pública, con cargo superior.

Lo anterior, toma reverencia, pues el proceso de evaluación de confianza según lo establecido en la página del Sujeto Obligado, <https://ccc.edomex.gob.mx/para_que%20sirven_evaluaciones_cc>, fortalece la credibilidad, eficiencia y operatividad en las instituciones de seguridad, de conformidad con la normatividad procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones.

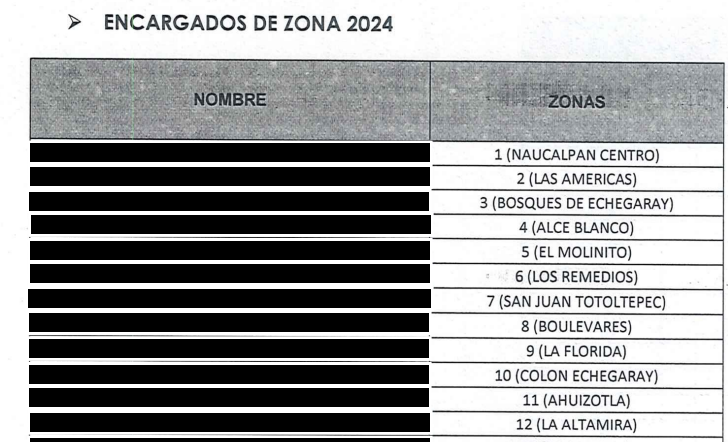
De tal suerte, toda vez que la pretensión del ahora Recurrente **es obtener el resultado global de la evaluación de control de confianza,** se considera que deberá proporcionarlo en versión pública; al respecto, conforme al artículo 3°, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y clasificada, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos, fundando y motivando la clasificación.

Lo anterior, se robustece con el Manual de Organización de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, que precisa que dicha área cuenta con Departamento de Recursos Humanos, encargado de integrar y registrar la documentación contenida en e registro de la base de datos del personal adscrito a la Dirección.

* **Nombres de los Encargos de Zona o Comandantes**

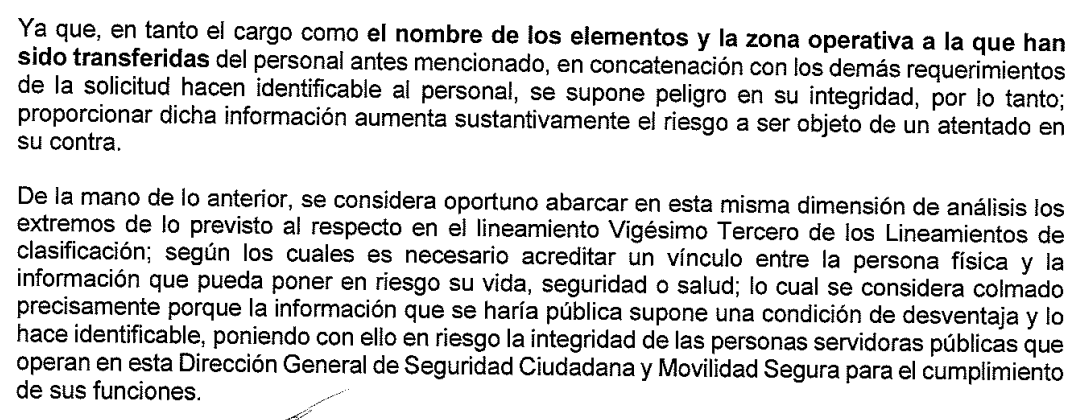
En principio cabe precisar, que en respuesta el Sujeto Obligado proporcionó un listado con nombres y las zonas de los cambios de los encargados de zona del trece de junio de dos mil veintitrés al trece de junio de dos mil veinticuatro, en versión pública en los que determinó clasificar el nombre de los elementos en términos del artículo 140, fracción IV, de la Ley de Transparencia Local, tal como se muestra a continuación:



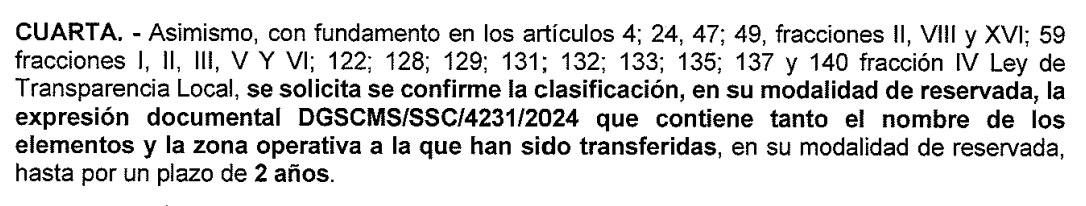


Al respecto, es señalar que este Instituto, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre la veracidad de la información. Apoya lo anterior, el Criterio de Interpretación, de la Primera Época, con número de registro SO/031/2010, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

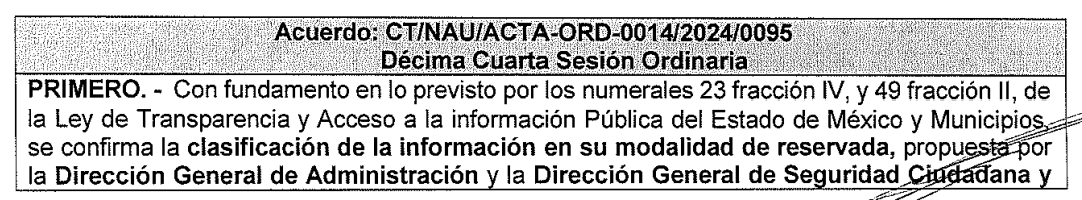
Situación que robusteció durante la sustanciación del medio de impugnación, mediante alcance al informe justificado en el que precisó que los nombres clasificados correspondían a elementos con funciones operativas y para tal efecto proporcionó el Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por medio cual se aprobó la reserva de nombre de los elementos operativos, mediante Acuerdo CT/NAU/ACTA-ORD-0014/2024/0095, tal como se muestra en los siguientes extractos:

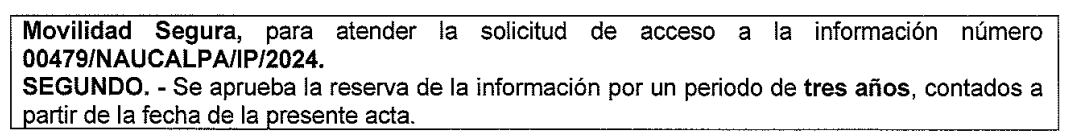


…



…





Conforme a lo anterior, se procede analizar si el nombre de los encargados de zona, mismo que realizan funciones operativas, actualizan la causal de reserva establecida en el artículo 140, fracción IV, de la Ley Local de Transparencia; al respecto, cabe referir, que conforme a lo que se señaló en párrafos anteriores, si bien por regla general los nombres de los trabajadores gubernamentales es información pública, existe una excepción relativa a **aquellos que realicen actividades operativas en materia de seguridad,** como es el caso de los elementos operativos y la policía municipal.

Al respecto, el artículo 4° de la Ley de Seguridad del Estado de México prevé que la función de seguridad pública se realizará, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las instancias encargadas de aplicar las infracción administrativas, y de las demás autoridades de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas.

En ese contexto, el artículo 6°, fracciones XI y XII de dicho ordenamiento jurídico, establece los siguientes conceptos:

* **Instituciones Policiales:** Son los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, detención preventiva, centros de arraigo y en general, **todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel** estatal y **municipal.**
* **Instituciones de Seguridad Pública:** Instituciones Policiales, Procuración de Justicia, Sistema Penitenciario y **dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel** estatal y **municipal.**

Conforme a lo anterior, se puede deducir que la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad, es una institución de seguridad pública, pues tiene como atribución principal, la prevención de delitos y proteger a las personas, sus propiedades, posesiones y derechos.

Además, el Instructivo de llenado del Formato “Personal de Seguridad Pública”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultado el quince de junio de dos mil veintitrés, en la liga electrónica <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/328/1/images/instructivo_final_edo_fuerza(1).pdf>), establece que los elementos operativos de seguridad pública, son aquellos que desempeñan funciones de campo (policiacas, especializadas o equivalentes y que no **desempeña funciones de mando**), entre los cuales, se encuentra **la Policía Municipal**.

Además, se advierte que las Instituciones Policiales, se conforman del personal administrativo, que son los trabajadores de apoyo (chofer, personal de mantenimiento, servicios generales y área secretaria); así como, **el personal de mando** (alto, medio y superior), que es aquel que realiza funciones de dirección, coordinación y supervisión, por lo cual, corresponde a aquel que tenga trabajadores a su cargo.

Así, dar a conocer el nombre de las personas, vinculado con el hecho que son personal operativo, los vuelve identificables y posiblemente reconocibles para grupos delictivos, puesto que pueden relacionarlos directamente con actividades u operativos pasados, presentes, o ubicarlos simplemente por el hecho de pertenecer o haber sido parte de una organización que lleve a cabo actividades de prevención y salvaguarda de la integridad de las personas en el combate a la delincuencia; además, dicha información puede ser utilizada para vulnerar su vida, seguridad o salud, incluso la de sus familias o entorno social, al aumentar el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales que persigue dicha área, intenten realizar actos tendientes a inhibir o entrometerse en las funciones de los policías municipales, lo cual causaría una vulneración a la seguridad municipal.

De tal situación, se considera que dar a conocer el nombre de los encargados de zona, puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de estos, de sus familias e incluso su entorno social, pues al hacerlos identificables, los hacen blancos de los agentes delincuenciales o inclusive a la delincuencia organizada, los cuales podrían amenazar o causarles algún daño, con el fin de entorpecer o disminuir la seguridad pública y aumentar la comisión de actos ilícitos.

Lo anterior toma relevancia pues los individuos con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con los elementos operativos, que incluye a la policía municipal o bien, someterla a extorsión o amenazas con el fin de obtener información sensible sobre el modus operandi de dicha área, lo cual se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia y un perjuicio a la seguridad pública, vulnerando así, el interés general.

Por tales consideraciones, **resulta procedente la reserva del nombre de los elementos operativos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, en términos del artículo 140, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

Sobre el particular, cabe traer a colación el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño establecida en el artículo 129 de dicho ordenamiento, que se debe justificar de la siguiente manera:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
2. El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda.
3. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Además, el artículo 125 de la Ley de la materia, establece que la información clasificada como reservada según el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Asimismo señala que los documentos reservados serán desclasificados cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo establecido, exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o bien el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación o se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; por lo que, en las versiones públicas, deberá clasificar el nombre de los encargados de zona de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, de manera fundada y motivada, mediante la respectiva prueba de daño.

Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos, fundando y motivando la clasificación.

Conforme a lo expuesto, se considera que para atender el requerimiento de información, el Sujeto Obligado deberá entregar el deberá emitir el Acuerdo debidamente fundado y motivado, mediante el cual se confirme la clasificación del nombre de los Policías Municipales Adscritos a la **Dirección General de Seguridad Ciudadanía y Movilidad,** de manera fundada y motivada, mediante la realización de la prueba de daño establecida en los Lineamientos Generales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en términos del análisis localizado en el presente CONSIDERANDO.

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que los documentos que den cuenta de lo solicitado, pudieran contener datos o información clasificada; por lo que, en el supuesto, deberá elaborar la versión pública respectiva; al respecto, conforme al artículo 3°, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y clasificada, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos, fundando y motivando la clasificación

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **MODIFICAR** la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a efecto de que, previa búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las unidades administrativas competentes, entregue la información faltante.

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular**

Se le hace del conocimiento al ahora Recurrente que, en el presente asunto, se le da la razón, pues el Sujeto Obligado no proporcionó la información completa, por lo que, deberá entregar la información faltante. La labor de este Instituto, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de sus datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a la solicitud de información 00479/NAUCALPA/IP/2024, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Ente Recurrido**,** a efecto de que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las unidades administrativas competentes, entregue a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), lo siguiente:

1. Respecto al Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura referido en respuesta, los documentos con los que contara al trece de junio de dos mil veinticuatro, que den cuenta de lo siguiente:
2. El expediente laboral, y
3. El resultado global de la evaluación de control confianza (aprobado, no aprobado u homólogo).
4. El acuerdo del Comité de Transparencia, debidamente fundado y motivado donde confirme la clasificación, en términos del Considerando QUINTO, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII y 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de lo siguiente:
5. Acta de Nacimiento, Cartilla Militar, Comprobante de Domicilio, Credencial de Elector, cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, certificado médico y cartas de recomendación, localizados en el expediente laboral referido en el numeral anterior, inciso a;
6. Los datos testados de los documentos que den cuenta del numeral 1 y que no correspondan a los clasificados en el inciso 2 a, y
7. El nombre de los Encargados de Zona referidos en respuesta.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de la materia, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables o recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en los artículos 159 y 160, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA CON VOTO PARTICULAR CONCURRENTE, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA CON VOTO PARTICULAR CONCURRENTE Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA CON VOTO PARTICULAR, EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.